

HACIA DONDE VA NICARAGUA EN 1985

El gobierno inaugurado el 10 de enero en Managua tiene la novedad de tener a un comandante guerrillero con la banda presidencial. Es la novedad de la legitimidad representativa otorgada por el voto electoral. Este nuevo gobierno se encuentra con varios condicionamientos positivos para realizar su gestión. Entre éstos los más importantes son los siguientes: un nacionalismo digno frente a la impositiva arrogancia de Reagan; una diplomacia ágil dispuesta a la negociación y al diálogo y que cuenta ya con importantes triunfos internacionales; un contacto directo y continuo de los gobernantes con los reclamos populares; una respetuosa firmeza de la policía y bajos niveles de coacción; una extensión masiva de la educación y una masiva mejoría de la salud; unos medios de comunicación que se esfuerzan por transmitir la verdad sobre las dificultades del país y no pocas veces sobre los errores de los gobernantes; un equipo dirigente de gobernantes que es fundamentalmente honesto; voz y participación en la creciente organización autónoma de los trabajadores; voz y participación creciente de todos en la vida cotidiana; 2 millones de manzanas de tierra entregadas a los campesinos en forma familiar o cooperativa a través de la reforma agraria; mantenimiento del crédito estatal para la producción privada agroexportadora; subvención a más de 200 centros de educación privada, en su mayoría religiosos, y a una universidad de inspiración cristiana; respeto básico a la religión de la mayoría del pueblo y a las confesiones minoritarias; presencia internacional solidaria y sin imposición.

También hay condicionamientos negativos resultado de errores, limitaciones e ingenuidades: un aparato gubernamental demasiado grande pa-

ra las necesidades del país, falta de previsión en cuanto que la agresión cortaría seriamente las posibilidades del desarrollo, la alucinación del triunfo no permitió prever la agresión militar, falta de rendimiento en el trabajo, el 45 por ciento de la población de la capital "trabaja" en el comercio informal integrando una interminable cadena de intermediarios y especuladores, falta de tacto en las relaciones con la jerarquías eclesiástica, fuerte, frecuente, e inútil desahogo retórico frente a Estados Unidos, exigencia de patrones urbanos de consumo, los cuales han acaparado las divisas, retrasando el desarrollo de la infraestructura campesina y los incentivos a la producción de granos básicos, la guerra de agresión se ha convertido en una barrera para el desarrollo y en una hipoteca sobre las aspiraciones populares (supone desviar el 25 por ciento del presupuesto nacional estrictamente para defensa y hasta un 40 por ciento si se consideran otros gastos no estrictamente militares).

La guerra de agresión continúa y continuará siendo el factor determinante de la situación nicaragüense y, por lo tanto, el problema fundamental que deberá enfrentar el nuevo gobierno sandinista. Es una guerra que posibilita la voluntad de revancha de antiguos somocistas y que obliga a desviar hacia cauces injustificados el descontento y el desconcierto de ciertos sectores campesinos marginados y de las comunidades étnicas aisladas completamente de la realidad nicaragüense. Como la guerra ha sido más intensa en las zonas cafetaleras y productoras de alimentos básicos ha dificultado más de lo normal la articulación complementaria de la ciudad y el campo. Paradójicamente, sin embargo, la guerra está probando con una seria cuota de sacrificio el en-



tusiasmo revolucionario de la población urbana, sobre todo en la capital. El desafío de asumir los costos dolorosos de la guerra ha llevado a la unidad nacional. De manera recíproca, el heroísmo y el diario aguantar de muchos campesinos, defensores de sus cooperativas, de unidades estatales de producción y de haciendas de productores privados han manifestado la no existencia de tendencias conservadoras insalvables y han supuesto un desafío para acelerar en el campo el proceso revolucionario. En consecuencia, vencer el condicionamiento dislocante de la guerra es también, desde el campo, un criterio de unidad nacional.

La crisis económica es otro de los factores determinantes de la actual situación y fuente de desgaste político considerable para el sandinismo. La crisis económica, sin embargo, no es tanto un problema de crecimiento de la economía —entre 1980 y 1983 la economía nicaragüense fue una de las pocas economías latinoamericanas que experimentó altas tasas de crecimiento. Se trata más bien de una crisis financiera producida por el empuje (a veces anárquico) hacia los cambios estructurales y por el desvío forzado de recursos hacia la defensa. Los productos de exportación nicaragüenses han generado 400 millones de dólares mientras que las inversiones en los proyectos a largo plazo, la defensa, la extensión de los servicios sociales y culturales y los insumos importados requieren hasta 1.000 millones de dólares. La brecha acumulada se ha ensanchado de forma intolerable.

A esto se suma el déficit fiscal ocasionado por una estructura impositiva inadecuada y por una inflación descontrolada por la escasez, la especulación y el agotamiento de la política de subsidios a los bienes básicos de consumo. Al déficit contribuye el bajo rendimiento del sector productivo, el cual ha estado siendo abandonado por el comercio informal, más rentable para muchos por la especulación. Si aún se añade a esto que la revolución nicaragüense no ha querido hacer cambios sin tratar de suavizar los costos para cualquier sector importante, el problema se vuelve más complejo. En esta voluntad de contar con todos y de beneficiar a todos se juega la unidad nacional necesaria para enfrentar con éxito las presiones norteamericanas.

El año 1985 será cualitativamente más duro para los nicaragüenses y supondrá al mismo tiempo un reto sin precedentes para el nuevo gobierno, el cual tendrá que demostrar que puede gobernar y administrar el país en medio de una de sus peores crisis política, social y económica. Esto se debe en buena medida a Estados Unidos, cuya administración ha logrado provocar exitosamente una contradicción entre las metas de justicia social y la defensa de la nación. El nuevo gobierno al elaborar su lista de prioridades para 1985 ha colocado primero defensa, luego salud y la atención social a los damnificados directamente por la agresión. De esta forma se han desplazado de la lista de prioridades educación, el subsidio a los costos de producción y las inversiones a largo plazo.

Esto se complementará con un reajuste de los salarios para los trabajadores productivos en orden a compensar la subida de los precios al recortar el subsidio. También ha sido congelada la ampliación de los servicios sociales en las ciudades en beneficio del campo. Se ha reducido la competencia del comercio informal contra el empleo productivo en la industria y en la agricultura. La lógica de este programa económico es la defensa del salario real de los trabajadores productivos; para ello se insistirá en la necesidad de más disciplina y productividad, se incentivará a los productores, se canalizarán bienes y servicios hacia los trabajadores productivos y se luchará sin cuartel contra los agiotistas y especuladores.

El nuevo gobierno también ha tomado iniciativas tendientes a conseguir la consolidación de la unidad política interna tan necesaria para poder superar la crisis. Entre las medidas políticas adoptadas sobresale la ley de amnistía para todos los contrarrevolucionarios, sin ninguna excepción, incluyendo a sus dirigentes, a los responsables intelectuales o materiales de crímenes o de la destrucción y a quienes hubiesen aceptado dinero de Estados Unidos o hubieran apoyado sus proyectos de intervención.

Simultáneamente, el gobierno ha tenido tres encuentros con los obispos nicaragüenses para distender las tensas relaciones que han mantenido hasta ahora. En este ambiente de distensión, el presidente de la conferencia episcopal dirigió una invocación a Dios, según la tradición parlamentaria nicaragüense, durante la instalación de las autoridades del nuevo gobierno. Su presencia en estos actos fue un reconocimiento de la legitimidad del nuevo gobierno. La polémica sobre los sacerdotes ministros no ha obstaculizado estas conversaciones de alto nivel ni será objeto de ellas.

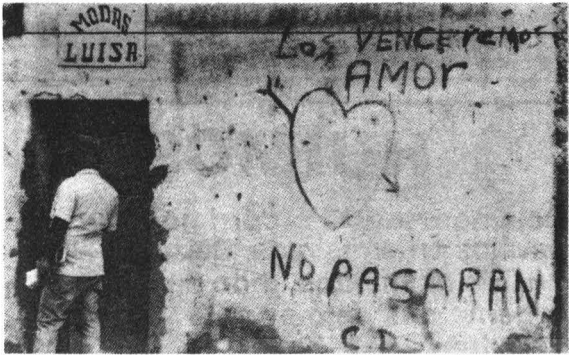
También se ha abierto un diálogo con las etnias de la costa Atlántica sobre el carácter de su autonomía. De momento parece perfilarse una autonomía formada por dos gobiernos regionales, uno en el norte y otro en el centro-sur del departamento de Zelaya. Estos gobiernos regionales se harán cargo de la gestión administrativa en lo referente al territorio, justicia, fuerza pública, educación y desarrollo. Todas las etnias estarán representadas en asambleas regionales con igualdad de derechos. Sin embargo, han surgido algunas dificultades serias con algunos de sus dirigentes debido a las presiones de la administración Reagan la CIA y los contrarrevolucionarios que

no desean que se resuelva este agudo y crónico problema porque ello no favorece sus intereses militaristas contrarrevolucionarios.

Las conversaciones con los partidos políticos de la oposición se han estancado. Sin embargo, el nuevo gobierno ha mostrado su disponibilidad para discutir las diferencias existentes. Algunas de estas han salido a luz de manera bastante irracional y violenta en la asamblea. Las discusiones parlamentarias, pobres y de poca altura en varias ocasiones, sobre los problemas más urgentes del país revelan que el aprendizaje será largo y lento; a los nuevos representantes no les será fácil estar a la altura de los retos planteados para 1985.

Por su parte, el presidente Ortega en su discurso en la toma de posesión afirmó como tesis central el derecho de Nicaragua a normalizar sus relaciones con Estados Unidos. Para defender eficazmente este derecho la diplomacia nicaragüense está desplegando nuevos esfuerzos para reforzar Contadora, reanudar las conversaciones de Manzanillo y alertar acerca del significado político que tendría la aprobación de la ayuda económica a los contrarrevolucionarios por el Congreso. Nicaragua sigue dispuesta a firmar el acta de paz siempre que las modificaciones introducidas a última hora no impliquen cambios sustanciales en el texto original de 7 de septiembre de 1984. Nicaragua quiere convencer a Estados Unidos de que es más racional y a la larga más eficaz para ambos la negociación política en un plano de respeto mutuo y aceptando ambos la revolución como un hecho irreversible.

Pero Estados Unidos se ha alejado cada vez más de la solución pacífica al conflicto. No ha respondido positivamente a ninguna de las ofertas hechas por el gobierno nicaragüense. Las últimas propuestas ofrecidas de manera unilateral por el presidente Ortega han sido descartadas con bastante facilidad. El 18 de enero Estados Unidos anunció su abandono del tribunal internacional de La Haya, justamente, cuando Nicaragua se preparaba para presentar su alegato. Los funcionarios norteamericanos alegaron que la corte estaba siendo parcial hacia Nicaragua, que tenían la impresión de que la corte se acabaría pronunciando a favor de Nicaragua y que las pruebas son demasiado sensibles para presentarlas en un tribunal. En síntesis, que su determinación era simplemente política y no un desconocimiento de la ley internacional. Alegando la falta de progresos sustanciales y la necesidad de ali-



viar tensiones entre los dos gobiernos, Estados Unidos se retiró de la misma forma de las conversaciones bilaterales de Manzanillo.

El proceso de Contadora ha sido obstaculizado de nuevo con mucha eficacia, justamente, cuando estaba listo el texto revisado de acuerdo a "los intereses norteamericanos," tal como lo pidieron Honduras, El Salvador y Costa Rica. Después de meses de amplias consultas, la firma del nuevo texto de paz fue postergado de modo indefinido a causa del incidente diplomático ocurrido en la embajada de Costa Rica en Managua. El mismo embajador de Costa Rica ante la OEA tuvo que reconocer que no se había violado la inmunidad de su delegación. Más aún, su gobierno sufrió una sonora derrota diplomática en la OEA cuando todos los representantes latinoamericanos por unanimidad remitieron el asunto al foro de Contadora. Ahora Contadora continúa mediando con cautela para hacer avanzar el pro-

ceso. Pero ya encontrará Estados Unidos un nuevo pretexto para evitar que se firme un tratado de paz centroamericano que no tome en cuenta prioritariamente sus intereses.

Si por un lado Estados Unidos se retiró de los foros políticos, por el otro está preparando las maniobras militares más gigantescas de las realizadas hasta ahora en la frontera de Honduras con Nicaragua. Las maniobras comenzaron el 11 de febrero y terminarán el 3 de mayo. Cada nueva maniobra militar ha superado a la anterior en costos y complejidad. Su eficacia real es otro problema; algunos analistas han denunciado que dichas maniobras, en las cuales han participado todas las fuerzas militares norteamericanas, se han caracterizado por su falta de coordinación y por una asimilación muy pobre de parte de los hondureños, a quienes supuestamente pretenden capacitar.

El desarrollo de estas maniobras militares es una prueba más de que no hay cambios significativos en la política exterior de Honduras, pese a las "valientes" declaraciones de algunos de sus funcionarios. Según el acta de paz propuesta por Contadora estas maniobras no estarían permitidas; el acta también establece la supresión de las bases militares extranjeras y la salida de los asesores extranjeros. Claramente, estas propuestas de Contadora no benefician los planes expansionista de la administración Reagan. En estas condiciones no puede aceptar el acta de paz de Contadora, ni la paz en Centroamérica.

R.C.